

El derrumbamiento del sistema soviético: un análisis político

El año 1991 en la difunta URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ha sido el año de la «lucha final» en el complejo proceso de enfrentamiento entre conservadores, reformadores y rupturistas del sistema. Este enfrentamiento ha constituido la espina dorsal de la lucha por el poder que se abrió inevitablemente en cuanto se impuso el principal y más concreto logro de la *perestroika*: la progresiva democratización de la sociedad. La irrupción de ésta en la escena política supuso, automáticamente, el resquebrajamiento del monopolio del poder y el desplazamiento de su centro de gravedad, el aparato comunista, a otras fuerzas. Gran parte de la última etapa de la *perestroika*, que se abre en marzo de 1989 con las primeras elecciones generales relativamente libres de todo el período soviético y acaba con el golpe fallido de agosto de 1991, es la historia de esas fuerzas emergentes, de su arraigo, configuración interna y, en definitiva, de su relación con el referente obligado, el partido comunista. Pero, a fin de cuentas, ha sido la esencia misma, la raíz estructural del sistema soviético —la fusión entre partido y Estado— lo que ha resultado ser su más mortífero caballo de Troya y la razón última de la caída de Gorbachov.

Las elecciones generales son la primera señal evidente de que el marco del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), en donde, lógicamente, se plasmaron las primeras expresiones de la pluralidad naciente, resulta ya demasiado estrecho para seguir reflejando esa realidad. Ante ello, la reacción de Gorbachov consiste fundamentalmente en concentrarse en la batalla de renovación *interna* del partido para adecuarlo al papel que él le atribuye de cabeza del movimiento de reformas. Esto le lleva a descuidar el verdadero significado, en términos de apoyo social, de las personalidades democráticas más radicales (en su mayoría aún integradas por aquel entonces en el partido) y de las nuevas y aún débiles «organizaciones sociales», eufemismo acuñado para designar toda aquella fuerza que aspiraba a alguna autonomía fuera del partido.

Mientras tanto, el proceso de cambio que se opera en todo el territorio soviético se sigue acelerando y ahondando con el agravamiento de la situación económica, y cuando empieza 1990 lo que, unos meses antes, era la primera institución mínimamente democrática del país, el Congreso de Diputados del Pueblo de la URSS, ya se percibe —por el hecho de estar dominado por el partido— como uno de los bastiones conservadores que obstaculiza la redistribución del poder que esperan las nuevas tendencias. Como era previsible, la necesidad para éstas de encontrar otros marcos institucionales hace que se vuelquen entonces en las elecciones generales y municipales, celebradas a nivel de las repúblicas a principios de 1990, en las que se confirma que cuentan con un apoyo importante de la población. Así empieza

Carmen CLAUDÍN
Responsable de Países del Este,
Fundació CIDOB, Barcelona

la revitalización de instituciones hasta entonces puramente decorativas como los parlamentos republicanos que nunca habían sido otra cosa que un tentáculo más de la dominación del PCUS. De ahí que, a finales de ese año, se llega a una situación institucional insostenible que se caracteriza por un desfase político cada vez más profundo entre el poder central, tanto más paralizado en cada república cuanto más deslegitimado ha quedado en las elecciones locales, y los poderes republicanos, tanto más activos en su territorio cuanto más representativos han salido de las urnas. A lo cual se suma el hecho importante de que Gorbachov sigue igual que cuando accedió a la presidencia, sin el refrendo de elecciones directas.

Para salir de la crisis, Gorbachov opera dos virajes, uno en otoño de 1990 y otro en primavera de 1991. Todo el desarrollo del año 1991 estará condicionado por el solapamiento de estos dos virajes de signo contrario que abren, cada uno de ellos, una dinámica excluyente que estalla en agosto.

El viraje conservador

Con el primer viraje —que todas las fuerzas democráticas denuncian como conservador—, 1991 empieza bajo los presagios más sombríos de todo el período de la *perestroika*. Esta nueva orientación se produce en otoño de 1990 como un intento de Gorbachov de poner fin a la parálisis del poder ejecutivo, resultante de las sucesivas declaraciones de soberanía de los *Soviets* Supremos (Parlamentos) republicanos que proclamaban y aplicaban la supremacía de las leyes republicanas sobre las soviéticas (la llamada «guerra de las leyes»). La debilidad de la política centrista de Gorbachov quedaba evidenciada por su incapacidad de estabilizar una situación cada vez más caótica y le empujaba inevitablemente a buscar un apoyo político que reforzara su posición. Por un lado, su convencimiento —debido en gran parte a su formación y convicciones personales— de que el partido sigue siendo el único instrumento fiable de poder ejecutivo y, por otro, su falta de confianza en la capacidad y orientación de las nuevas fuerzas democráticas, le llevan a ceder a la creciente presión que ejerce sobre él el sector conservador del partido. Durante el último trimestre de 1990, este viraje se plasma, entre otros, en el abandono del plan Shatalin «de 500 días», en la destitución a la cabeza del ministerio del Interior de un hombre bastante liberal como Vadim Bakatin y su sustitución por Borís Pugo, presidente del Comité Central del PCUS, y en la presentación de la candidatura de Guennadi Yanáev, un fun-

cionario típico del aparato, para su elección al cargo de vicepresidente. Todo ello configura un panorama interno que explica, en gran medida, la espectacular dimisión, en diciembre de 1990, del ministro de Asuntos Exteriores, Edvard Shevardnadze, y los términos dramáticos con que denuncia un peligro de golpe de Estado. A principios de 1991, Gorbachov tiene que confrontar su nueva línea a tres momentos fuertes: la crisis del Báltico, las huelgas mineras y la celebración del referéndum de la Unión.

La crisis del Báltico

Los primeros efectos contraproducentes de esta opción de Gorbachov se hacen sentir desde los primeros días de enero en el Báltico. Las fuerzas del ministerio de Defensa y de la policía paramilitar (OMON, Destacamentos de Milicia para Asuntos Especiales) del ministerio del Interior (MVD) protagonizan una intervención armada, en Lituania y Letonia, que apunta directamente a cuestionar la legitimidad de las autoridades republicanas y que se salda con 19 muertos, la mayoría civiles, y varios centenares de heridos. El golpe de fuerza, que se produce inmediatamente después de la ruptura por parte soviética de las negociaciones sobre el estatus de Lituania, adquiere inmediatamente un significado emblemático que no habían conseguido alcanzar anteriores conflictos, sin embargo más sangrientos que éstos. La gran diferencia radica en que, en Vilnius y Riga, por primera vez desde el inicio de la *perestroika*, el poder central recurre a la fuerza armada para socavar instituciones masivamente refrendadas por la voluntad popular. El trauma en las filas democráticas y entre los movimientos nacionalistas es tanto mayor cuanto que las repúblicas bálticas estuvieron siempre a la cabeza de los cambios democráticos. Además, si algún derecho a la independencia recogía mayor consenso entre los soviéticos era el de los bálticos, ante los cuales, por añadidura, ya se había reconocido oficialmente la ilegitimidad del pacto Mólotov-Ribbentrop de 1939 y de la anexión soviética. Otro motivo de preocupación es el momento elegido para la intervención que refuerza la idea de que se trata de una acción madurada que cuenta, para desviar la atención internacional, con la crisis del Golfo y la necesidad de los occidentales de asegurarse el apoyo soviético. Por fin, la indignación se acrecenta cuando empiezan a aparecer Comités de Salvación Nacional, formados por miembros del partido comunista prosoviético (los comunistas bálticos se habían escindido a finales del 89 y principios del 90), que llegan incluso a formar gobiernos fantoches y sirven de pretexto al ministro del Interior para legitimar la intervención, según el escenario clásico de las ingerencias soviéticas en los asuntos internos de

los países «hermanos» como Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968.

Pero el mayor motivo de preocupación proviene claramente de la actitud de Gorbachov durante la crisis. Actitud que, cuando menos, se puede tildar de ambigua. Probablemente, en ningún momento de su trayectoria, la imagen de Gorbachov ha salido tan deteriorada dentro y fuera de su país. Ninguna ocasión anterior había puesto tan de manifiesto las vacilaciones y contradicciones de su acción y pensamiento políticos. En su primera declaración pública, el 10 de enero, Gorbachov hace responsable de los acontecimientos al Parlamento lituano por violar la Constitución soviética y burlarse de los derechos civiles, llegando a denunciar la utilización de consignas democráticas «para encubrir una política orientada a la restauración del sistema burgués» (Foye, 1991a). Por otra parte, el ambiente de censura creciente en los medios de comunicación que provocan manifestaciones masivas en Moscú y las amenazas de Gorbachov de suspender la ley sobre la prensa contribuyen a confirmar los peores temores. La cuestión central que se debate entonces y que vuelve a surgir a raíz del golpe fallido de agosto es, evidentemente, el grado de responsabilidad directa de Gorbachov en los acontecimientos del Báltico. ¿Quién dio la orden de disparar? y, si no fue Gorbachov, ¿cómo pudo pasar? serán preguntas recurrentes durante mucho tiempo. Ninguna de las respuestas deja en buen lugar a Gorbachov. Su responsabilidad política es obvia teniendo en cuenta el respaldo que ha dado a los otros dos protagonistas de la crisis, Dmitri Yázov (ministro de Defensa) y Borís Pugo (ministro del Interior), sumado al hecho de que Gorbachov nunca llega a condenar de manera absolutamente inequívoca los trágicos acontecimientos. Pero incluso la interpretación más benigna para Gorbachov, a saber, que la crisis del Báltico fue el resultado, como dijeron algunos de sus consejeros, de una trampa de la derecha en la que cayó sin saberlo, suscita, ya entonces, una alarma generalizada respecto al grado de control real que ejerce el presidente sobre las instituciones involucradas. Como observa Stephen Foye, «decir que Gorbachov no estaba involucrado en los acontecimientos de Vilnius lleva a la conclusión de que fue engañado por las Fuerzas Armadas, el KGB (Comité de Seguridad del Estado), el MVD y, presumiblemente, por el Partido Comunista» (Foye, 1991a). Aunque cueste admitirlo, esta posibilidad, a la luz del golpe fallido, no es descartable. Pero, sea como sea, es sin lugar a duda el mismo Gorbachov quien se tiende su propia trampa. Lo que probablemente no se sabrá nunca con certeza es si la preocupante lentitud que demuestra Gorbachov en poner fin a la espiral báltica responde a su dificultad para entender el verdadero alcance de los hechos o a la de restablecer su autoridad

sobre los responsables militares, o a ambas cosas a la vez. Lo único seguro, en todo caso, es que esta crisis no ha tenido ningún efecto positivo en las ya problemáticas relaciones del centro con las repúblicas, que no ha contribuido a aumentar la confianza de éstas en el centro ni a aliviar la guerra de los presupuestos, otra modalidad de la guerra de leyes. A nivel internacional, la primera consecuencia es la decisión norteamericana de aplazar la cumbre prevista para febrero entre Bush y Gorbachov. Los lituanos, por su parte, sacan rápidamente la lección de la crisis: convocan para el 7 de febrero un referéndum sobre la independencia que se adelanta a la convocatoria de Gorbachov para marzo y que consigue un apoyo arrollador de la población e incluso un voto positivo importante en las zonas de mayor concentración rusa y polaca.

Si este conflicto ha sido probablemente el primer factor que da a pensar a Gorbachov sobre la oportunidad de la línea escogida, las consecuencias de esta reflexión no se hacen notar hasta más tarde. El 14 de enero, Gorbachov nombra primer ministro a Valentín Pávlov, que no destaca como «halcón» pero que tampoco es conocido por su talante liberal. Pávlov, fundamentalmente un técnico, es en opinión de algunos observadores soviéticos, el que menor convicción ha demostrado en su participación en el golpe de agosto. Desde las primeras horas de éste, opta por la vía rusa favorita para ignorar lo que uno prefiere no ver: ahogarse en alcohol. Pero, hasta entonces, Pávlov va a desempeñar un papel importante en la línea del primer viraje. Mientras tanto, un nuevo factor de crisis irrumpe en el camino de Gorbachov.

Las huelgas mineras

Entre marzo y abril, un amplio movimiento huelguístico se extiende en las minas de carbón de la Federación Rusa, Ucrania y, finalmente, Bielorrusia. La importancia de las huelgas mineras sobre el desarrollo del proceso interno en la URSS no ha sido, tal vez, bastante valorado fuera del país. En mi opinión, éstos fueron, además de los resultados electorales republicanos, uno de los indicadores más claros de la voluntad de cambio de la sociedad soviética.

Se trata de la primera gran huelga del período gorbachoviano después del «ensayo general» que se había producido en julio de 1989. Aunque tuvieron cierto alcance entonces, los paros habían sido mucho más limitados y de menor duración, además de estar dominados por reivindicaciones de carácter económico. Esta vez la huelga, que durará dos meses largos, adquiere rápidamente proporciones imponentes y acapara la atención de todos los medios informativos. También en el período anterior se habían dado explosiones sociales

y huelgas salvajes, todas ellas motivadas por la situación material, inmediatamente aplastadas sin contemplaciones y condenadas al silencio absoluto (Claudín, 1981). Esta vez, las reivindicaciones políticas son la característica dominante del movimiento huelguístico: dimisión de Gorbachov y del Gobierno, transferencia de las minas a la jurisdicción republicana en el caso ruso, disolución de las células del partido en los lugares de trabajo y nuevas elecciones republicanas en el caso bielorruso. No es difícil ver que se reúnen aquí todos aquellos elementos claves del sentir popular que concurren a la deriva del Estado soviético: cambio de dirección política, soberanía nacional y liquidación del PCUS. Este movimiento huelguístico, que destaca también por una organización interna inesperadamente buena, a su vez ha permitido a la población conocer y desarrollar una experiencia nueva, la solidaridad activa. En una sociedad atomizada y compartimentada como era la soviética hasta pocos años antes, este hecho adquiere un valor muy decisivo. Además, las consecuencias económicas de los paros pronto se revelan desastrosas para una situación ya muy deteriorada. Por fin, este episodio tiene que haber tenido una influencia importante en los tres dirigentes republicanos que se encontraron a la postre en los inicios de la CEI (Comunidad de Estados Independientes). Para Leonid Kravchuk es una confirmación más de la línea adoptada en el sentido de consolidar la soberanía ucraniana. Stanislau Sushkévich, entonces vicepresidente del *Soviet* Supremo republicano y futuro presidente, es uno de los negociadores con los mineros y habrá entendido claramente por dónde soplaban los vientos en la hasta ese momento tan tranquila Bielorrusia. Por fin, la intervención de Yeltsin, a principios de mayo, es decisiva para convencer a los huelguistas de que reanuden su trabajo. Una de las promesas que les hace es la de contribuir a liquidar la dominación del PCUS, que los obreros identifican claramente como el responsable último de la situación del país. De ahí que el decreto de Yeltsin, del 20 de julio, sobre la disolución de las células del partido en las empresas e instituciones públicas en el territorio ruso es absolutamente coherente con sus compromisos adquiridos. Pero, por encima de todo, el principal argumento que convence a los mineros para volver al trabajo es la transferencia de las minas a la jurisdicción rusa, transferencia que Yeltsin ha conseguido poco antes en las negociaciones entre Gorbachov y los presidentes de nueve repúblicas, conocidas como «acuerdo 9 + 1».

Con este acuerdo, Gorbachov inicia claramente su segundo viraje. Una serie de factores que se suman en marzo y principios de abril le convencen de la necesidad de abandonar urgentemente la línea de actuación seguida desde el otoño de 1990.

Del referéndum de la Unión al acuerdo 9 + 1

La celebración de un referéndum sobre el mantenimiento de la Unión era, desde hacía tiempo, el caballo de batalla de Gorbachov. A principios de este año, el referéndum ya representaba para él el último recurso para demostrar a los líderes republicanos que las tendencias centrífugas iban en contra de la voluntad popular y, de paso, para reforzar su propia posición desbloqueando la parálisis del ejecutivo.

La falta de claridad de la pregunta planteada («¿Considera Ud. necesario preservar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas iguales y soberanas, en la que los derechos humanos y las libertades de todas las nacionalidades serán plenamente garantizadas?») no es la única de las peculiaridades del referéndum, celebrado finalmente el 17 de marzo. Para empezar, en las seis repúblicas (las tres bálticas, Georgia, Moldavia y Armenia) que, por razones diversas, se niegan a llevarlo a cabo en la fecha y modalidad propuestas, sólo votan los representantes de las minorías nacionales de cada territorio. En las consultas separadas que organizan esas repúblicas, antes o después del 17 de marzo, una arrolladora mayoría vota a favor de la independencia. De las nueve repúblicas restantes, sólo cinco (Azerbaiján, Bielorrusia, Kirguizia, Tadjikistán y Turkmenistán) plantean únicamente la pregunta original. Por fin, y sobre todo, las tres más importantes o bien añaden otra pregunta (Federación Rusa y Ucrania) o bien la cambian pura y simplemente (Kazajstán). Por consiguiente los resultados permiten varias lecturas y, como ya argüían los principales dirigentes republicanos, se prestan fácilmente a interpretaciones contradictorias. Conviene recordar, por ejemplo, que la lectura unilateral de estos resultados sirve de pretexto a Anatoli Lukiánov —presidente del *Soviet* Supremo soviético y uno de los más próximos colaboradores de Gorbachov— para denunciar el contenido del Tratado de la Unión que se iba a firmar en agosto, en una declaración reproducida por los golpistas y puesta en circulación simultáneamente a su primer decreto.

De ahí que la victoria del sí no puede sino despertar en Gorbachov una satisfacción mitigada por el análisis detallado de los resultados en las tres repúblicas principales. En Kazajstán, en donde se da la mayor proporción de residentes rusos, la población vota positivamente por la preservación de la URSS como una unión de «Estados soberanos iguales». En Ucrania, la respuesta positiva a la pregunta del centro (70,2 %) queda claramente superada por el apoyo (80,16 %) a la pregunta adicional sobre la pertenencia de la república a una «Unión de Estados Soviéticos Soberanos, sobre la base de su declaración de soberanía». En la Federación

Rusa, por fin, la victoria del voto a favor de elecciones presidenciales directas tienen una lectura política evidente puesto que se reforzaría así un Ejecutivo ruso para el cual Yeltsin parte claramente como favorito. Como se puede constatar, aparecen ya una serie de indicadores de tendencias que ponen de manifiesto la coherencia de la evolución posterior de los acontecimientos.

El mensaje del referéndum, sin embargo, no es unilateral. Aunque los resultados confirman en las tres principales repúblicas el enfoque que dan sus dirigentes a la cuestión de la Unión, el alto índice de participación (con la notable excepción de grandes ciudades como Moscú y Leningrado) también señala el interés de la población por lo que está en juego y la necesidad para las repúblicas de mostrarse dispuestas a una verdadera negociación sobre el tema.

Mientras tanto, la situación económica y la parálisis de la actividad laboral en las minas hacen más aguda aún la urgencia de la negociación. El 4 de abril, el presidente de la Comisión para el Presupuesto del Soviet Supremo de la URSS anuncia que absolutamente todas las repúblicas han rebajado o dejado de aportar sus contribuciones al presupuesto federal. La crisis del presupuesto federal se cifra, hasta la fecha, en una recaudación inferior a la cuarta parte de los ingresos previstos. Advierte también que, de seguir así, se tendrá que proceder a drásticos recortes en las prestaciones sociales y los salarios de las empresas estatales. Una perspectiva que se materializará a partir de septiembre, como una de las primeras consecuencias del golpe.

Por otra parte, Yeltsin sale victorioso de un ataque conservador en regla en la sesión extraordinaria del Congreso de Diputados de la Federación Rusa que se celebra del 28 de marzo al 5 de abril. Consigue además que los diputados, ante los resultados del referéndum, aprueben la creación de una presidencia ejecutiva por elección directa. Teniendo en cuenta el frágil equilibrio de fuerzas del parlamento ruso, la victoria de Yeltsin demuestra un repliegue del sector conservador y el reforzamiento inequívoco de su posición. Estos dos últimos factores, sumados a todo lo demás, se imponen definitivamente a Gorbachov como razones de peso para cambiar de aliados.

El cambio de alianzas: el pacto centro-repúblicas

El acuerdo 9 + 1

Gorbachov convoca para el 23 de abril a los presidentes de las nueve repúblicas participantes en el referéndum a una reunión en Novo Ogaríovo, en la perife-

ria de Moscú. El apresuramiento de la iniciativa es tal que ni el presidente de Ucrania, ni el de Bielorrusia, ambos de viaje en el extranjero, pueden asistir a la reunión y tienen que delegar en sus primeros ministros. Después de nueve horas y media, los diez líderes emiten una declaración anunciando que han llegado a un acuerdo (conocido como «acuerdo 9 + 1») para salir de la crisis política y económica. El acuerdo fija un calendario con diferentes etapas: firma del Tratado de la Unión, promulgación de una nueva Constitución soviética, celebración de elecciones generales al Congreso de Diputados del Pueblo de la URSS.

El acuerdo, que muchos observadores han considerado como un pacto entre Gorbachov y Yeltsin, es un compromiso en el cual las concesiones del centro son claramente mayores que las de las repúblicas. En primer lugar, implica de hecho el trasvase a las repúblicas de gran parte de las funciones del gobierno central y supone una vinculación muy estrecha de aquellas a la toma de decisiones del centro en todas las materias. Esto se traduce, entre otras cosas, por la elevación del estatus de república a Estado. Gorbachov gana a cambio el reconocimiento de la legitimidad del centro y la confirmación de los poderes del presidente soviético como jefe supremo de unas Fuerzas Armadas centralizadas. Consigue además que se incluya una serie de medidas económicas como la adopción del programa anticrisis presentado por Pávlov el 22 de abril y, sobre todo, la introducción de un «régimen especial» en las ramas clave de la actividad económica, acompañada de un llamamiento a los mineros para que reanuden el trabajo.

El mayor alcance del acuerdo 9 + 1 es que, en su momento, abre el camino para desbloquear la situación de parálisis que vive el país, poniendo en marcha un proceso de negociación que expresa, como mínimo, una voluntad política de encontrar una salida consensuada. Desde el primer momento, sin embargo, la negociación se anuncia ardua. Se dice que el texto de la declaración conjunta, preparado por Gorbachov, fue modificado en un 80 % en el curso de la discusión (Solchanyk, 1991). La perspectiva resulta tanto más difícil por cuanto que las concepciones en torno al Tratado presentan diferencias sustanciales y los negociadores tienen que salvar toda la distancia que separa el concepto de Estado federal —que defiende Gorbachov— del de la llamada federación, o incluso confederación, de Estados —que defienden las repúblicas de mayor peso.

Las repúblicas y el Tratado de la Unión

Lo cierto es que las repúblicas llevaban tiempo debatiendo entre ellas sobre el tipo de Tratado que más

respondía a sus intereses. Ya en febrero, representantes de Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán y la Federación Rusa se encuentran para discutir la posibilidad de redactar su propio tratado de unión de Estados soberanos que podrían sustituir al de Gorbachov. El 18 de abril, en Kíev y por iniciativa del *Soviet* Supremo ucraniano, se vuelven a encontrar, esta vez con la presencia de Uzbekistán. Son pues las cinco repúblicas más importantes de la URSS las que se reúnen para adoptar una posición conjunta ante la reunión convocada por Gorbachov el 23.

Uno de los puntos clave acordados en este encuentro —y que Gorbachov acaba aceptando— es la exclusión de las repúblicas autónomas como sujetos del Tratado. Esta decisión se explica por la necesidad en que se encuentran las repúblicas federadas de contener los movimientos centrifugos de sus propias minorías nacionales, fenómeno que el centro aprovecha en su lucha contra las primeras. El problema afecta sobre todo a la Federación Rusa que cuenta con 16 de las 20 repúblicas autónomas existentes, las cuales han declarado también su soberanía y reclaman el derecho a ser sujetos del futuro tratado. Pero todas las repúblicas comparten el mismo interés en atajar esta tendencia pues, de lo contrario, sus propias minorías pueden decidir elevar su estatuto o crearlo, como ya ha pasado en algunos lugares, y establecer vínculos directos con el centro, el cual siempre ha intentado monopolizar el papel de árbitro en los conflictos intrarrepúblicanos.

Pero la idea central que preside este encuentro, idea promovida principalmente por la Federación Rusa y Ucrania, es, en sustancia, que todo el poder tiene que pasar a manos de las repúblicas y que el centro no puede ser sino un mero instrumento de coordinación de la voluntad de unos Estados soberanos.

El aislamiento de Gorbachov

El acuerdo 9 + 1 significa además que, a partir de abril, la suerte de Gorbachov queda en manos de las repúblicas. En las semanas que siguen a la declaración se impone la evidencia de que Gorbachov lleva solo el peso de la negociación en la que actúa siempre como presidente de la Unión. Esta desvinculación del partido como apoyo en el proceso negociador responde al aislamiento creciente que crean alrededor de Gorbachov sus aliados de ayer. En el pleno del PCUS, que empieza al día siguiente de la declaración de Novo Ogaríovo, éste se ve sometido al ataque más duro de su carrera. Las señales de acercamiento a las fuerzas democráticas que Gorbachov había estado dando en las últimas semanas enfurecen al sector conservador que pide su dimisión como secretario general e incluso como presidente. El líder de los comunistas de la Federación Rusa, Iván

Polozkov, le acusa de abandonar el partido, de contribuir al desmembramiento de la patria y de ser incapaz de tomar las medidas fuertes necesarias para restablecer el orden. Como en otras ocasiones, Gorbachov consigue dominar el juego de tal forma que, después de presentar la dimisión que se le pedía, ésta es rechazada por aplastante mayoría. Fue probablemente un error de cálculo por su parte: una vez más, había perdido una excelente ocasión para dejar el PCUS, su mayor lastre desde hacía tiempo. Aunque, a esas alturas, ya era sin duda demasiado tarde.

Los siguientes pasos que da Gorbachov no contribuyen sino a irritar aún más a los círculos conservadores. El 16 de mayo, logra que se apruebe una nueva legislación sobre el KGB, en la que se delimita y reduce claramente las funciones de este organismo, a la vez que se afirma que no está subordinado a ningún partido ni movimiento. La ley establece también los derechos de los ciudadanos frente a dicha institución. A principios del mismo mes, las fuerzas de la policía pasan a la jurisdicción republicana, a excepción de las fuerzas especiales, los OMON. El 22 de junio, Gorbachov decreta la suspensión de la actividad del partido en los llamados «consejos militares», en realidad el brazo político del PCUS en el ejército a nivel regional (Foye, 1991b).

Mientras tanto, la evolución del partido sigue una línea imparable. Un nuevo pleno se reúne en julio. Gorbachov pretende entonces dar la batalla final a los inmovilistas que dominan la dirección del partido presentando un nuevo programa tan avanzado en su orientación socialdemócrata (en el texto se habla incluso de un modelo de sociedad aún más avanzado que el de las socialdemocracias occidentales) que éstos no tendrán más remedio que abandonar el partido. Aparte de lo sorprendente de esta táctica en un conocedor como Gorbachov de la vieja tradición comunista, representada en sus rivales, según la cual la dirección no «se va» sino que expulsa, la maniobra no consigue los resultados esperados, porque ya no hay batalla que librar dentro del partido. El PCUS se ha vaciado de los últimos mejores elementos que le quedaban: Alexandr Yákovlev, la eminencia gris de la *perestroika*, declara no querer perder el tiempo en el pleno; Shevardnadze dimite en julio; el vicepresidente ruso, Alexandr Rutskói es expulsado a principios de agosto. Probablemente, en esos momentos, la cúpula del PCUS ya está preparando la otra batalla que se avecina. Del acuerdo de abril, la fórmula 9 + 1 que designa repúblicas + centro queda reducida a repúblicas + Gorbachov. El problema para éste es que el nuevo centro al que él aspira aún no existe y el viejo se niega a desaparecer.

El golpe de agosto

Los antecedentes del golpe

El golpe de Estado de agosto es la culminación de un proceso involucionista que empieza, a principios de enero, con los sangrientos acontecimientos del Báltico. La línea de actuación de los protagonistas de este proceso demuestra que intentaban recuperar posiciones perdidas durante los últimos años de la *perestroika*. La opción de Gorbachov, en otoño de 1990, de apoyarse en los sectores duros del sistema alienta lógicamente las pretensiones de quienes ven cada vez más claro que la evolución del proceso de cambios, iniciado por la *perestroika*, desborda peligrosamente para ellos los planteamientos iniciales de modernización y reforma del sistema. Cada día que pasa les confirma en la idea de que las tendencias del cambio apuntan, más y más cerca, a los fundamentos mismos del sistema.

El primer viraje de Gorbachov les hace abrigar esperanzas en la posibilidad de alterar la marcha de esta evolución, con el apoyo consciente o inconsciente de éste. Los acontecimientos del Báltico son, desde este punto de vista, paradigmáticos de cómo estos sectores interpretan y aplican lo que ellos entienden como una luz verde que les ha dado Gorbachov. Otros episodios también podían ayudar a Gorbachov a entender antes por dónde se orientaban en el fondo sus «aliados». En casi todos los casos afloran los viejos argumentos en la más pura tradición estalinista del viejo sistema: peligro de subversión interior, conspiración exterior, amenaza a la seguridad, etc. A principios de febrero, por ejemplo, el primer ministro, Valentín Pávlov, hace unas declaraciones, que causan estupor dentro y fuera de la URSS, sobre la existencia de un complot occidental destinado a crear una hiperinflación artificial, derribar a Gorbachov e instalar un gobierno favorable a una privatización rápida que permita comprar todo el país a precio de saldo. Todo ello devuelve el eco de otras palabras pronunciadas, en diciembre de 1990, por Vladímir Kriuchkov, presidente del KGB, quien en la televisión acusa a los servicios de inteligencia extranjeros, en especial a la CIA (Agencia Central de Inteligencia), de agravar las tensiones interétnicas con su apoyo a los movimientos nacionalistas.

Cuando Gorbachov opta por fin por el cambio de alianza, las ondas expansivas del primer viraje continúan con la inercia del impulso dado: los actores siguen en sus cargos y en su empeño. Uno de los momentos más significativos de la ofensiva que lanzan los conservadores se desarrolla mientras Grigori Yavlinski expone a Gorbachov, a Yeltsin y al presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, un plan económico que Gorbachov podría presentar ante la reunión del G-7 en

julio. El mismo día, 17 de junio, durante una sesión cerrada del *Soviet* Supremo de la URSS, Pávlov pide mayores poderes ejecutivos para salir de la crisis económica y la subordinación del presidente al Gobierno (Rahr, 1991). Esta petición, que algunos analistas han considerado como un intento derechista de golpe de Estado constitucional, recibe el apoyo de los ministros de Defensa, de Interior y del presidente del KGB, según los cuales la *perestroika* ha traído «el frío, el hambre y una defensa inadecuada» (Foye, 1991b). Yázov, en particular, denuncia los efectos negativos en la situación material de las FF.AA. derivados de la política exterior llevada a cabo, caracteriza la retirada de los países de Europa central como una «derrota histórica» y, por fin, se queja del bajo nivel de reclutamiento debido a las tendencias centrífugas de las repúblicas y a la reforma militar que, entre otras cosas, permite prórrogas para los estudiantes. Su amarga observación —según la cual, de seguir así, las fuerzas armadas soviéticas quedarán reducidas a un ejército de obreros y campesinos— suena tanto más curiosa cuanto que se supone que ése ha sido precisamente el orgullo del Ejército Rojo. El 21 de junio, en el momento de votar, Gorbachov consigue nuevamente el repliegue de los conservadores, reafirmando su compromiso con las repúblicas y con la política exterior de Shevardnadze. Como observa Alexander Rahr, el desenlace de esta maniobra debe haber convencido a más de un dirigente conservador de que el camino legal, incluso con el apoyo del KGB, Defensa e Interior, ya no es operante (Rahr, 1991). Y como confirmación de sus peores temores, Borís Yeltsin, su bestia negra desde los primeros años de la *perestroika*, gana holgadamente las elecciones presidenciales de la Federación Rusa, el 12 de junio, lo cual ya no deja lugar a duda sobre la evolución futura de la Unión. Con estos parámetros, el Tratado de la Unión —fruto de las negociaciones entre Gorbachov y las repúblicas y umbral de cambios estructurales en las relaciones de poder— convierte pues el 20 de agosto, fecha prevista para la firma, en el límite a no franquear.

Un golpe de despacho

Como le dijo el general Jaruzelski a Lech Walesa, cuando éste le llamó alarmado para pedirle su opinión de «experto», lo de Moscú no fue un golpe militar *comme il faut*. Las fronteras permeables, las comunicaciones sin cortar, las detenciones masivas inmediatas no llevadas a cabo, nada responde a un esquema de golpe clásico. De haberlo creído conveniente, los integrantes del GKChP (Comité Estatal para el Estado de Emergencia), los «gukachepistas» o «junta» como los llamaron enseguida los rusos, podían movilizar muchas

más fuerzas que las desplegadas esos días en las calles de Moscú. Pero no dan realmente un golpe militar, sencillamente, porque no lo consideran necesario. Setenta años de experiencia soviética ha hecho de ellos políticos de despacho puros que, en el fondo, seguían viviendo en el mundo de antes, convencidos de que un paseo de blindados por la ciudad, una declaración firme y una apariencia de legalidad bastarían para devolver el viejo miedo a los moscovitas.

Su desconexión del país real, la disparidad personal de los dirigentes implicados y la negativa de Gorbachov de sumarse al plan les condenan al fracaso. Obviamente apuestan por el descontento social, el cansancio de la gente ante la situación material, el desorden, la división, para brindarles un apoyo al menos pasivo de la población. También interpretan mal los escasos resultados de Gorbachov en la reunión del Grupo de los 7 en julio. Piensan que los occidentales también están cansados de tanto desorden y desorganización y que, en el fondo, no verían con malos ojos el restablecimiento de una autoridad, sea o no democrática, que les garantice algo de tranquilidad. Porque estos hombres que ven la causa de todos los males en los demócratas, nacionalistas y liberales, no pueden entender que para la gente, en cambio, ellos son los que representan el origen del mal, los que han impedido las reformas prometidas para no perder su poder omnímodo. Su ceguera les impide ver cómo ha cambiado el país, cómo la gente ha aprendido a hablar y a actuar, cómo muchos soldados y oficiales han votado por Yeltsin, cómo la gente ha empezado a abandonar el PCUS por millones, cómo, en definitiva, ha empezado a nacer una sociedad civil. No se dan cuenta de que los últimos años han hecho descubrir a mucha gente muy diversa —incluidos oficiales del ejército y del KGB que también viven inmersos en la sociedad en mutación— que existen cosas llamadas legitimidad, legalidad, libertad de expresión, voluntad popular, etc., que se pueden aplicar y que funcionan si se les deja. Por eso, desde el punto de vista del pasado soviético, la cuestión no es cuántos salieron a la calle para oponerse a la intentona sino que, por primera vez, hubo gente que salió.

Gorbachov y el golpe

Probablemente, no será nunca posible establecer con exactitud hasta qué punto fue manipulado Gorbachov por estas fuerzas durante todo el año. El lamentable comportamiento de éste durante la crisis báltica justifica la duda, pero, por otra parte, toda su trayectoria y su indiscutible compromiso personal con los ideales de la *perestroika* hacen pensar que ha sido el juguete de sus mal escogidos aliados tácticos. Sea como sea, resulta asombroso constatar cómo un hombre de la talla políti-

ca de Gorbachov, con su estrecho conocimiento de la realidad del sistema que él mismo quiere reformar, se mete en la boca del lobo, convencido además de que éste no sólo no va a comérselo sino que encima le ayudará a alcanzar el objetivo buscado. Sus declaraciones en la conferencia de prensa celebrada tras su liberación causan consternación: mientras los golpistas se preparan para implicarlo en la usurpación del poder, él sigue creyendo que puede contar con ellos, en especial con Kriuchkov; pese al silencio cómplice de la dirección del PCUS durante el golpe, él sigue pensando que el partido puede jugar un papel fundamental para la *perestroika*, como efectivamente se ha comprobado, pero en un sentido totalmente contrario al previsto. En resumen, no ha entendido nada. Cómo la perspicacia y la experiencia de Gorbachov consiguen casar esta fe de carbonero con todas las señales de aviso en sentido contrario que le dan sus antiguos aliados —sin hablar de las explícitas advertencias de sus más íntimos colaboradores— es algo que, desde el punto de vista del hombre, sólo se puede explicar tal vez por convicciones ideológicas que limitan su entendimiento político, pero que, desde el punto de vista del político, hacen recaer sobre él una responsabilidad enorme ante el golpe y sus consecuencias.

Los nuevos actores

El legado del centro «realmente existente»

A la vista de los acontecimientos, resulta chocante la tardanza con que Gorbachov cae en la cuenta de las implicaciones del despertar nacional de las repúblicas y pone en marcha el proceso de revisión del Tratado de la Unión. Todavía en septiembre de 1989, en el pleno del Comité Central de PCUS dedicado a discutir la política de nacionalidades, Gorbachov rechaza la idea de una revisión del Tratado. Empieza a reconsiderar su actitud en febrero de 1990 cuando habla por primera vez de la necesidad de renovar el Tratado, probablemente bajo el impulso del proceso independentista del Báltico. No es sino hasta el 12 de junio de 1990 cuando crea un grupo de trabajo para redactar un nuevo tratado, justo en el momento en que el *Soviet* Supremo de la Federación Rusa proclama su soberanía. Cuando el proyecto de nuevo Tratado se publica a finales de noviembre de 1990 ya no satisface a casi ninguna república. También empieza tarde a introducir una cierta federación en las estructuras del partido: en julio de 1990, el XXVIII Congreso del PCUS da mayor autonomía a los dirigentes comunistas republicanos y decide la entrada automática en el Buró Político de los primeros secretarios de

partido en las repúblicas. Y al cabo de un año de «guerra de leyes», decide a finales del 90 elevar el *status* del Consejo de la Federación de órgano consultivo a órgano decisorio (Sheehy, 1991). El problema es que el momento de mayor actividad del centro en vistas a la renovación del Tratado coincide con el viraje conservador de Gorbachov, hecho que le resta apoyo político. Cuando a finales de diciembre de 1990, Gorbachov propone ocupar el cargo de vicepresidente a Nursultán Nazarbáyev, presidente de Kazajstán, uno de los líderes republicanos más moderados y de mayor prestigio, éste decide exponer a Gorbachov una serie de críticas sobre su reciente política para apreciar las reacciones del presidente soviético, y llega a la conclusión de que a Gorbachov le disgusta la crítica. El cargo que él no acepta va a parar a manos de Yanáev, la cabeza visible del futuro golpe.

Pero, más allá de la política concreta de Gorbachov, el legado de la historia rusa y de los 70 años de centralismo soviético ha hecho tales estragos que ningún nuevo texto jurídico, ninguna nueva voluntad política, podrían ni podrán acabar fácilmente con ellos. Como observa Charles Urjewicz, la política de «divisiones administrativas arbitrarias y trazados de frontera perversos», llevada a cabo desde principios de los años veinte, no era una aberración caprichosa sino que estaba destinada a asegurar permanentemente el papel de árbitro del centro (Urwicz, 1990). Muchos de los conflictos interétnicos tienen su origen directo en esta política de dividir para reinar: pueblos, tierras, recursos, etc. Otra de las características de esta política es que, a la división de la coherencia interna de las realidades culturales-nacionales existentes, se superpone un modelo de organización social uniforme que, en el fondo, cuestiona el derecho a la diferencia mientras que, en apariencia, favorece manifestaciones puramente folclóricas de la riqueza cultural de los diversos pueblos. Uno de los resultados de todo ello es que la identificación de cada individuo con su supuesta ciudadanía soviética es tan débil, que sólo le queda el «origen nacional» como única base sólida de autoidentificación. En su relato del viaje que realizó por todo el territorio soviético, el periodista polaco Ryszard Kapuscinski explica que, fuera a dónde fuera, lo primero que se le preguntaba era su nacionalidad (Kapuscinski, 1990). Pero, como lo subraya Urjewicz, una de las peores consecuencias de esta política es que ha favorecido la aparición de nacionalismos provincianos que no conocen nada más que la realidad de su entorno inmediato —en el mejor de los casos el de su república— y que a falta de otro reproducen el modelo del centro en las relaciones de dominación con sus propias minorías nacionales. Si se suma a esto el enorme desconocimiento del mundo exterior y de su evolución en que el sistema ha sumido a su

población durante tres cuartos de siglo, se aprecia entonces el alcance de los conflictos presentes y futuros, con la dificultad añadida de que la resolución de éstos está en manos de políticos y legisladores condicionados por parámetros similares.

En el proceso abierto de recuperación de la soberanía nacional por las repúblicas, el desarrollo de la situación interna en la Federación Rusa, Ucrania y Kazajstán, y las relaciones que establezcan entre sí, son los factores centrales en la evolución futura de la frágil CEI. Las diferencias de planteamientos entre estas repúblicas radican básicamente en tres factores: la dependencia económica kazaja, la radicalización de la conciencia nacional ucraniana y el renacimiento de una conciencia nacional rusa desligada de su asimilación a lo soviético. Además, la personalidad política de los dirigentes ha sido determinante en los tres casos.

El pragmatismo asiático

En Kazajstán, el presidente Nursultán Nazarbáyev ha resultado ser un comunista pragmático que ha entendido rápidamente la necesidad de desvincularse del discurso ideológico. Desde su llegada a la presidencia del *Soviet* Supremo en abril de 1990, la prioridad de su programa ha sido adoptar todos los medios necesarios para la recuperación de la situación económica e impedir la irrupción de conflictos interétnicos en su territorio, en donde los kazajos están en minoría y en una proporción casi idéntica a los rusos. La consecución de esta política de buena convivencia le ha evitado la pérdida de cuadros cualificados, en gran parte rusos, como ha ocurrido en otras repúblicas asiáticas por temor a los enfrentamientos. La idea de soberanía nacional de Nazarbáyev está estrechamente ligada con la de la autonomía económica: libertad de adoptar la política económica deseada y de aplicarla sin las trabas del centro, libre disposición de los recursos propios, etc. Poco después de su llegada a la presidencia, Nazarbáyev promueve un tratado económico regional entre las cinco repúblicas de Asia central que se firma en junio de 1990. Cuando Gorbachov abandona el plan económico radical «de los 500 días», Nazarbáyev nombra asesor económico a Grigori Yavlinski, uno de los coautores del programa. Poco a poco, y muy probablemente a raíz de sus viajes por el extranjero, el presidente kazajo, que siempre se ha declarado comunista, se adhiere a la idea de que el modelo de desarrollo a seguir para la región es el de los NICs (Nuevos Países Industrializados) asiáticos, Corea del Sur, Singapur, Taiwán. Su defensa de la soberanía nacional frente al centro ha sido lo bastante convincente como para no alienarse la oposición nacionalista kazaja y para ganarse el respeto de la oposición democrática de las repúblicas soviéticas occi-

dentales, al contrario de sus homólogos asiáticos que, con la reciente excepción de Kirguizia, siguen basando su poder sobre las estructuras del viejo sistema. Todo ello le ha conferido un papel de líder dentro de la zona asiática de la URSS que sólo el reforzamiento y la expansión del resurgimiento islámico podrían llegar a cuestionar. En la nueva recomposición de relaciones que se dibuja después de la liquidación del centro soviético, Nazarbáyev entiende perfectamente que la única baza de la que dispone para seguir imponiéndose como interlocutor obligado de los eslavos y para no quedar olvidado de los occidentales, es el armamento estratégico nuclear desplegado en su territorio. La forma en que se ha encontrado ante el hecho consumado de la creación de la CEI, sin que se le haya consultado, le habrá puesto sobre aviso, si es que ello era necesario para un político obviamente tan perspicaz como él. Pero su necesidad de mantener los lazos económicos con las antiguas repúblicas, muy especialmente con la Federación Rusa, no le permite sino subirse al carro e intentar conseguir la recomposición de algún tipo de unión, al menos económica.

El factor ucraniano

El factor ucraniano ha sido una de las mayores revelaciones del año 1991 en la escena política soviética. La aparente irrupción, después del golpe, de la posición ucraniana —claramente decidida a acabar con cualquier tipo de centro— responde en realidad a un proceso interno reciente pero muy constante en el curso del cual se ha ido dibujando e imponiendo una concepción cada vez más clara de la soberanía nacional. Ya en la reunión de abril de las cinco repúblicas para consensuar una posición común antes del encuentro con Gorbachov en Novo Ogariovo, *Naródnaya Rada* (Consejo del Pueblo), el grupo de oposición democrática en el parlamento ucraniano, dice claramente que la fórmula fijada entonces de una unión de Estados soberanos sólo es transitoria y que el objetivo final ha de ser la desaparición de cualquier tipo de centro. Todas las disposiciones que van adoptando las instituciones ucranianas (Declaración de Soberanía del 16 de julio de 1990; Tratado firmado con la Federación Rusa el 19 de noviembre de 1990; etc.) recogen cada uno de los puntos que serán motivo de fricción después del golpe: intangibilidad de las fronteras, ciudadanía propia, propiedad de los recursos nacionales, derecho a una fuerza armada nacional, entre los principales. El análisis de la evolución interna de Ucrania muestra claramente que la voluntad política está orientada a convertirla cuanto antes en un país más en el mapa europeo central —en el que ya ha empezado a tejer lazos con sus vecinos— con la convicción de que sólo el atraso económico, debido al

centro/sistema, le impide ser la potencia regional que sus otras características implican.

El desconcierto que ha causado el resurgir de la conciencia nacional ucraniana se debe fundamentalmente a dos razones: en primer lugar, a la influencia de la percepción rusa que siempre ha considerado a Ucrania como una parte inmutable de su propia identidad y, en segundo lugar, al hecho que la república fue efectivamente durante mucho tiempo una de las más tranquilas de la parte occidental de la URSS. El movimiento nacionalista era ya muy activo desde principios de 1990 pero no había conseguido penetrar con fuerza en el nuevo *Soviet* Supremo aún dominado por los comunistas. De ahí el papel determinante que desempeña Leonid Kravchuk en la evolución de las relaciones de fuerza del parlamento. Como Nazarbáyev, la trayectoria de Kravchuk es la de un dirigente comunista típico que incluso, como el primero, no llega en julio de 1990 precedido por una reputación de liberal. Rápidamente, sin embargo, consigue confirmarse como uno de los dirigentes políticos más populares de Ucrania por su defensa coherente de los intereses nacionales, actuación basada, como él mismo ha declarado repetidas veces, en la declaración de soberanía y en los resultados del referéndum. Lo cierto es que su política no ha respondido a lo que el partido probablemente esperaba de él. Al contrario, consigue dividir a la mayoría comunista del parlamento en lo que muchos analistas llaman «comunistas imperiales» y «comunistas soberanos» (Solchanyk, 1991b). Con ello gana terreno a los separatistas y consolida su papel dirigente. Como hace notar Solchanyk, la identidad política de Kravchuk, tal como él mismo la define, es una total novedad en la tradición soviética: un político que intenta representar a sus electores. Por otra parte, su moderación a la hora de abordar el tema de las minorías nacionales de Ucrania, entre las cuales la rusa es la más importante, le permite evitar expresiones de separatismo como en otras repúblicas. Desde esta perspectiva, es muy significativo que la región de Crimea, poblada mayoritariamente por rusos y que, en enero de 1990, vota por referéndum a favor de elevar su *estatus* a república autónoma, no pide en cambio su reunificación con la Federación Rusa. Una de las claves es, por una parte, que la dirección ucraniana, al contrario de lo que han hecho otras en el mismo caso, no denuncia la ilegalidad del referéndum y, por otra, que la tan temida —y tan anunciada desde el centro— política de «ucranización» no se revela especialmente agresiva. El referéndum sobre la independencia celebrado en diciembre de 1991 también da, en las zonas de mayoría rusa, resultados bastante tranquilizadores para los dirigentes ucranianos. A finales de 1991, para Ucrania, el verdadero problema ruso no está dentro sino fuera de su territorio. De ahí que la

evolución del eje Kiev-Moscú va a dominar por mucho tiempo el problemático proceso de la CEI.

El renacimiento del Estado ruso

La cuestión rusa es la más compleja de las tres. A la preponderancia objetiva que imprimen a la Federación Rusa sus características físicas y demográficas, se añade la confusión que ha existido entre Rusia y el sistema soviético desde la revolución bolchevique, y entre Rusia y el sistema central/imperial, durante siglos. Mientras centro y sistema seguían ligados, la línea divisoria entre cambio y continuidad pasaba fundamentalmente, para el conjunto de las fuerzas políticas soviéticas, por la dicotomía demócratas/conservadores cuya piedra de toque era la postura ante el sistema. De ahí que hasta agosto, la defensa de la soberanía por parte de las fuerzas democráticas rusas —que, por encontrarse en el ojo mismo del huracán, representaban para el centro el mayor reto a su estabilidad— convirtiera a éstas en un aliado objetivo de las repúblicas con mayor aspiración a la independencia, atenuando el hecho de su identificación con la nacionalidad dominante. Pero, a partir de agosto, cuando el centro acaba por desaparecer, la línea divisoria de la lucha política se desplaza de la dicotomía anterior para pasar a la tensión rusos/no rusos, lo cual enmarca las relaciones interrepúblicas, que después del golpe empiezan una nueva etapa, en los parámetros históricos del imperio ruso.

Así como en los países del Este europeo las poblaciones podían identificar claramente el modelo soviético como un producto impuesto por la fuerza desde fuera, ajeno a su historia nacional, los pueblos no rusos de la URSS tienen la posibilidad, desde el punto de vista de la conciencia colectiva, de argumentar lo mismo. Para los rusos, en cambio, el sistema soviético es producto de su propia historia por mucho que los bolcheviques hayan usurpado el poder. Esta doble característica preside toda la evolución de la lucha política interna de la Federación Rusa en el curso de la cual empieza a emerger una conciencia nacional rusa que se contrapone a la soviética, se desvincula de la responsabilidad política y moral del centro, y se declara tan víctima o más que las otras nacionalidades de la actuación de éste. Desde este punto de vista, la evolución de Boris Yeltsin de comunista reformista de nuevo cuño, que arremete contra la burocracia inmovilista, a opositor tenaz del sistema comunista es paradigmática del enorme cambio de mentalidad que se ha producido entre los rusos, muy particularmente en la clase política e intelectual del país.

La oposición democrática rusa nace en el corazón del partido y, cuando éste ya no da más de sí, sale a la calle y empieza a aprender el verdadero «trabajo de masas». Como dijimos antes, las estructuras republicanas se

presentan entonces como el único camino para conseguir una plataforma política desde la cual actuar y, como en las demás repúblicas, la bandera de la soberanía se impone como el eje lógico alrededor del cual vertebrar la base social del cambio (Sabúrov, 1991). Con la ayuda, inconsciente pero valiosísima, de la dirección del partido, cuyo ensañamiento contra Yeltsin consigue hacer de éste un héroe popular, la oposición encuentra el líder que le faltaba. Las elecciones presidenciales rusas, en junio, son un punto de no retorno para las relaciones de fuerza existentes, como se demostró en los acontecimientos de agosto. En torno a la figura del presidente, e independientemente de otras divisiones internas, la oposición se agrupa frente al enemigo común, el poder soviético, el PCUS. Desde agosto de 1990 está preparando sucesivos planes económicos que no llegan a cuajar porque aún carece del poder ejecutivo necesario. Pero a lo largo del año, en el curso de la «guerra de leyes» que el Parlamento ruso libra también, a pesar de una fuerte y activa representación conservadora, se elabora una legislación económica mucho más liberal que la central y que atrae un número creciente de empresas bajo jurisdicción republicana, reforzando el poder del Estado ruso. La elección de Yeltsin, por amplia mayoría y a la primera vuelta, abre definitivamente a la oposición el camino del poder.

El golpe de agosto abre una dinámica nueva que coge por sorpresa al equipo de Yeltsin: le obliga a definirse sobre la concepción de los intereses del Estado ruso que guiará su línea de actuación y sobre el tipo de poder ejecutivo que, según su análisis, requiere la situación. Se acentúa así una tensión que ya existía antes del golpe en las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo rusos. Estas relaciones estaban condicionadas entonces por la propia composición del *Soviet* Supremo en donde el equilibrio de fuerzas entre conservadores y demócratas obligaba a los primeros a cerrar filas en torno al presidente frente a los segundos. Tras el golpe, la unión sagrada contra los conservadores se rompe y aparecen las inevitables divergencias. Los temas de mayor controversia son evidentemente las cuestiones claves del período de transición que se abre: la política económica (terapia de choque/gradualismo); la opción por un Ejecutivo fuerte que una parte de la oposición democrática tilda de autoritarismo; la estructura multinacional del Estado ruso y su política frente a las reivindicaciones de soberanía no sólo de las muy importantes minorías nacionales —como los tártaros o los chechenes— sino incluso de regiones de población rusa tales como el Extremo Oriente siberiano; y, por fin, la cuestión que sesga todas las demás, la posición de Rusia frente al tema de la unión con las demás ex repúblicas. La tendencia que prevalece a finales del año en el Ejecutivo está representada por el primer viceprimer minis-

tro, Guennadi Búrbulis, que defiende una posición más bien aislacionista: la unión implicaría un debilitamiento del potencial económico ruso en beneficio de las ex repúblicas más subdesarrolladas, como ya pasaba —según este enfoque— en el sistema anterior; Rusia debe consolidarse primero en tanto que Estado unitario, democrático pero fuerte, para convertirse después en un polo de atracción futuro para las otras ex repúblicas. La incógnita frente a esta postura que, lógicamente, despierta las peores inquietudes entre sus vecinos y puede resultar peligroso para la llama encendida de la cuestión nacional rusa, es si dispone realmente de los medios para llevar a cabo su política y cómo quedará afectada por las arduas negociaciones con Ucrania.

La gran pregunta que se plantea, dentro y fuera del país, es qué tipo de poder se está configurando y sus implicaciones para la débil democracia rusa: si, como sostienen algunos, nos encontramos ante un autoritarismo que derivará rápidamente a una tiranía no comunista o si, como piensan otros, la orientación que se dibuja bien podría ser una versión rusa del Gobierno gaullista de la V República francesa, autoritario pero legitimado por expresiones de la voluntad popular (Teague, 1991). Esta última perspectiva sería la mejor imaginable en las condiciones del legado soviético y, desde luego, existen razones para no descartarla de entrada. Pero la distancia entre las tradiciones políticas rusas y las francesas es tan abismal que un salto cualitativo de estas proporciones es, cuando menos, difícil de imaginar.

Conclusión

El sistema soviético, heredero en muchos aspectos del imperio ruso, nunca ha correspondido al modelo «clásico» de colonialismo más que en las consecuencias típicas para los pueblos sometidos de realidades tales como dependencia, expoliación, humillación, resentimiento, etc. Pero, a diferencia de los grandes imperios coloniales occidentales, dos características han dominado siempre las relaciones centro-repúblicas: la unidad territorial y la unidad jurídica del Estado central. Históricamente, sólo en dos momentos se ha encontrado el imperio al borde del colapso: en los llamados «tiempos turbulentos» bajo el zar Borís Godunov, a finales del siglo XVI, y en el período siguiente a la revolución bolchevique. En ambos casos, el origen del tambaleo del imperio es la crisis del centro. Esto es exactamente lo que ha ocurrido con el encadenamiento vertiginoso abierto por la *perestroika*. El intento de golpe ha acabado de hacer el trabajo en tres días: la trinidad PCUS-

sistema-centro se ha roto en este orden y para siempre.

Los últimos meses de 1991 son el verdadero inicio de una nueva era y el fin de lo que fue la etapa de su gestación, la *perestroika*. Con ello, lo que acaba este año no es tanto un país como un sistema, un modelo de sociedad. Como todo período de transición, la *perestroika* encierra inevitablemente elementos entremezclados de lo antiguo y de lo nuevo; pero es evidente que, en estos seis años y medio, son las convulsiones finales del pasado soviético las que han dominado la escena y que sólo ahora empieza la laboriosa configuración de algo radicalmente inédito e imprevisible. Por ello, como observa muy justamente Evgueni Sabúrov, ex ministro de Economía de la Federación Rusa, este último año político traza en realidad un círculo que va de agosto de 1990 a agosto de 1991. Quedan todas las razones del pasado para preocuparse por lo que Kapuscinski llama el «agujero negro» que pervive hasta ahora como herencia del estalinismo; pero, a partir de agosto de 1991, por muy difícil que resulte superar este lastre, lo que empieza es otra historia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- CLAUDÍN, F. (1981). *La oposición en el «socialismo real»*. Madrid: Siglo XXI, pp. 30-35.
- FOYE, S. (1991a). «Gorbachov Denies Responsibility for Crackdown», *Report on the USSR*, 4: 1-3.
- FOYE, S. (1991b). «Gorbachov's Return to Reform: What Does it Mean for the Armed Forces?», *Report on the USSR*, 28: 5-9.
- KAPUSCINSKI, R. (1990). «No hay clave que descifre el enigma ruso», *La Vanguardia*, 11/12.
- RAHR, A. (1991). «Are El'tsin and Gorbachev Now Allies?», *Report on the USSR*, 27: 6-9.
- SABUROV, E. (1991). «El colapso de la Unión Soviética». En *Anuario de los Hechos*. Barcelona: Difusora Internacional.
- SHEEHY, A. (1991). «The State of the Multinational Union», *Report on the USSR*, 1: 16-19.
- SOLCHANYK, R. (1991a). «The Gorbachev-El'tsin Pact and the New Union Treaty», *Report on the USSR* 19: 1-3.
- SOLCHANYK, R. (1991b). «The Changing Political Landscape in Ukraine», *Report on the USSR*, 24: 20-23.
- TEAGUE, E. (1991). «In Search of New Political and Economic Structures», *Report on the USSR*, 42: 4-5.
- URJEWICZ, C. (1990). «El resurgimiento de los nacionalismos en la Unión Soviética y Europa del Este». En *Anuario Internacional CIDOB* (Barcelona: Fundació CIDOB), p. 126.